



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

RDP-538-16

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. CONSEJO SUPERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. MANAGUA, VEINTIOCHO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS, LAS UNA Y CUATRO MINUTOS DE LA TARDE.

VISTOS RESULTA:

A las nueve y treinta minutos de la mañana del día veintidós de abril del año dos mil dieciséis, el Consejo Superior de este Ente Fiscalizador, en Sesión Ordinaria Número Novecientos Setenta y Siete (977), aprobó el Plan Anual de Verificaciones de Declaraciones Patrimoniales a ejecutarse en el año dos mil dieciséis, por parte de la Dirección de Probidad de la Dirección General Jurídica de este Ente Fiscalizador. Se emitió el correspondiente Informe Técnico con Código de referencia **DGJ-DP-005-(222)-08-2016** de fecha veinticuatro de agosto del año dos mil dieciséis, relacionado con el proceso administrativo de Verificación de la Veracidad de la Declaración Patrimonial presentada ante este Órgano Superior de Control cinco de septiembre del año dos mil once por la Licenciada **ANA MARÍA MARENCO MEMBREÑO**, Contador “A” del Fondo Nacional de Desarrollo Forestal (FONADEFO). Que los objetivos del proceso administrativo consistieron en: 1) Comprobar si el contenido de la Declaración Patrimonial presentada por el Servidor Público, está acorde con lo establecido en la Ley Número 438, “Ley de Probidad de los Servidores Públicos” y 2) Determinar inconsistencias derivadas del proceso administrativo a cargo del Servidor Público, si los hubiere y que podrían establecer responsabilidad a su cargo. Que el alcance del proceso administrativo comprendió: A) Notificar mediante comunicación escrita el inicio del proceso administrativo de verificación de veracidad de la Declaración Patrimonial al Servidor Público, B) Elaborar fichaje o resumen de la Declaración Patrimonial del Servidor Público y analizar el contenido de la misma, a efectos de determinar omisiones y solicitar se subsanen si las hubiese, C) Solicitar información sobre los bienes muebles e inmuebles ante las instancias correspondientes, incluyendo a las Instituciones Financieras Nacionales, Públicas, Privadas o Mixtas, Aseguradoras y Reaseguradoras donde el Servidor Público tiene registrados los bienes que son de su propiedad, de su cónyuge o de sus hijos bajo autoridad parental, y D) Recibir de parte de las Entidades descritas en el literal c) la información sobre el registro de bienes muebles e inmuebles y cotejar con el contenido de la declaración rendida por el Servidor Público. Rolan las respectivas credenciales del trabajo de verificación debidamente notificada a las máximas autoridades de las siguientes entidades del Estado: 1) Registro Público de la Propiedad Inmueble y Mercantil de Managua; 2) Dirección General de la Policía Nacional de Tránsito y 3) Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras, por ser estas las entidades encargadas del registro de bienes inmuebles y mercantil, registro vehicular y registro de cuentas bancarias. Refiere el precitado Informe que en el curso de la causa administrativa de verificación, como parte de las garantías del debido proceso en fecha veintiséis de abril del año dos mil dieciséis, se notificó mediante carta el inicio del proceso administrativo iniciado a la Licenciada **ANA MARÍA MARENCO MEMBREÑO**. Que se solicitó a las entidades ya referidas nos remitieran la información relacionada con los bienes registrados a nombre de la Licenciada **ANA MARÍA MARENCO MEMBREÑO**. En fecha veintitrés de mayo del año dos mil dieciséis, se recibió la información requerida de la Dirección General de la Policía Nacional de Tránsito. De igual manera, se recibió la información del Banco de la Producción (BANPRO). Con fecha dos de junio del año dos mil dieciséis, recibimos información suministrada por



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

el Banco PROCREDIT. Con fecha diez del mismo mes y año, recibimos información suministrada por el Banco LA FISE BANCENTRO y el Banco de Finanzas (BDF), los días veintisiete y veintinueve de junio recibimos la información del Banco de América Central (BAC) y del Banco FICOHSA, respectivamente. El día treinta de junio recibimos información del Registro Público de la Propiedad Inmueble y Mercantil. De los resultados de las diligencias investigativas de verificaciones y con la información suministradas por las entidades descritas se identificaron algunas inconsistencias que difieren de la Declaración de Probidad del caso de autos. Que como parte del debido proceso se procedió a notificar a la Licenciada **ANA MARÍA MARENCO MEMBREÑO**, Contador “A” del Fondo Nacional de Desarrollo Forestal (FONADEFO), tales inconsistencias a efectos de justificarlas y para ello se le otorgó un plazo de quince días, más el término de la distancia, previniéndole que de no recibir sus aclaraciones podría devenir en Responsabilidad Administrativa a su cargo. En fecha cuatro de agosto del año dos mil dieciséis se recibieron las justificaciones que según la Licenciada **MARENCO MEMBREÑO**, pretendió aclarar las inconsistencias debidamente notificadas. Por lo que habiéndose sustanciado con arreglo a derecho el presente proceso y no habiendo más procedimientos que realizar, ha llegado el caso de resolver; y

CONSIDERANDO

I

El artículo 130 párrafo segundo de la Constitución Política estatuye que “todo funcionario del Estado debe rendir cuenta de sus bienes antes de asumir su cargo y después de entregarlo. La ley regula esta materia”. Los artículos 7, literal e) y 12, literal a) de la Ley Número 438, “Ley de Probidad de los Servidores Públicos”, establecen como deber de todo Servidor Público presentar la Declaración Patrimonial y cualquier aclaración que de la misma solicite la Contraloría, conforme a lo establecido en la presente ley y constituye falta inherente a la probidad del Servidor Público no presentar la Declaración Patrimonial en tiempo y forma. Adicionalmente, el artículo 27 de la precita Ley de Probidad determina que la Contraloría puede efectuar los controles necesarios y solicitar a la declarante las explicaciones y aclaraciones que considere pertinentes. Citadas las disposiciones legales que sirvieron de base para darle curso al proceso administrativo de verificación de probidad, se analizó el contenido de la Declaración Patrimonial presentada por la Licenciada **ANA MARÍA MARENCO MEMBREÑO** y se determinó que dicha funcionaria dijo: No poseer propiedades, sin embargo, del informe suministrado por el Registrador Público de la Propiedad Inmueble y Mercantil, se evidencia que el cónyuge de dicha funcionaria tiene inscrita a su favor la propiedad cuyos datos registrales son: 1) **Finca N° 11513, tomo 39/137, Folios 104/151, Asiento 1°**, columna de inscripciones sección de derechos reales del Libro de Propiedades.- Que tal inconsistencia, fue dada a conocer a la Licenciada **ANA MARÍA MARENCO MEMBREÑO**, a efectos de que presentara sus alegatos, aclaraciones o ampliaciones que considerara necesaria, para el desvanecimiento, para lo cual se le otorgó el plazo de quince días. Que mediante comunicación recibida en fecha cuatro de agosto del año dos mil dieciséis la Licenciada **MARENCO MEMBREÑO** alegó que su cónyuge no tiene inscrita ninguna propiedad y adjuntó Certificación de “Negativa de Bienes” extendida por el Registro Público de la Propiedad, con fecha veintiocho de julio del año dos mil dieciséis, en la cual certifica que el señor **Juan José Zelaya** no tiene inscrito a su favor ningún bien raíz o derecho real en lo personal o en comunidad, tanto en área urbana como en rural por lo que no la incorporó a su Declaración Patrimonial. En cuanto corresponde a la propiedad a nombre del señor **Juan José**



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Zelaya, cónyuge de la Servidora Pública, por existir contradicción entre la Certificación emitida por el Registro Público de la Propiedad con fecha treinta de junio del año dos mil dieciséis y la Certificación de Negativa de Bienes emitida por el mismo Registro con fecha veintiocho de julio del mismo año, se procedió a solicitar una aclaración a la Lic. **Dominga de la Concepción Espino**, Registradora Auxiliar del Departamento de Managua, para que se nos informara si el señor antes mencionado tiene o no bienes inscritos a su favor, por lo que con fecha treinta y uno de agosto del año dos mil dieciséis, se recibió una nueva Certificación, en la cual se confirma que el señor **Juan José Zelaya**, con Cédula de Identidad N° 085-270373-0000K, tiene inscrita una propiedad a su favor con el siguiente dato registral: **Finca N°11,513, Tomo N° 39 y 137, Folios N° 104 y 151, Asiento 1°**, Columna de inscripciones sección de derechos reales del Libro de Propiedades del Registro Público de la Propiedad Inmueble y Mercantil del Departamento de Managua. Como consecuencia de lo anterior, queda plenamente demostrado que el señor **Juan José Zelaya**, quien es cónyuge de la Licenciada **MARENCO MEMBREÑO** tiene inscrita a su favor la propiedad antes descrita objeto del proceso y que no fue incorporada en su declaración, y la alegación que hace de que no posee ninguna propiedad razón por la que no la incorporó en su Declaración Patrimonial, incurre en Faltas de conformidad al Arto. 12 inciso c) de la Ley de Probidad de los Servidores Públicos. Como consecuencia de lo anterior, en el presente caso, hay ocultamiento de la información relacionada a los bienes que posee la Licenciada **MARENCO MEMBREÑO**, lo que trajo como consecuencia, la violación del artículo 131 de nuestra “Constitución Política”, sexto párrafo que en su parte in fine dice: **Los funcionarios y empleados públicos son personalmente responsables por la violación de la Constitución, por falta de probidad administrativa y por cualquier otro delito o falta cometida en el desempeño de sus funciones;**. Asimismo violentó el artículo 12, inciso c de la Ley 438, “Ley de Probidad de los Servidores Públicos”, incurrió en una falta al **ocultar en la Declaración Patrimonial subsiguientes, bienes que se hubieren incorporados a su patrimonio, al de su cónyuge o acompañante en unión de hecho estable y de los hijos sujetos a patria potestad**”. Finalmente, incumplió, el Arto. 104 Numeral 1) de la Ley N° 681, “Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema de Control de la Administración Pública y Fiscalización de los Bienes y Recursos del Estado”, que dispone que los Directores o Jefes de Unidades Administrativas, tienen como deber y atribución **cumplir y hacer cumplir las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias, normas y demás disposiciones expedidas por la Contraloría General de la República o por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público**, y el artículo 38 Numeral 1) de la Ley N° 476, “Ley del Servicio Civil y la Carrera Administrativa”, que establece que todo Servidor Público debe **respetar y cumplir con lealtad la Constitución Política, la presente Ley y su Reglamento y otras leyes relativas al ejercicio de la función pública, así como las obligaciones inherentes a su puesto**, razón por la cual, deberá establecerse responsabilidad Administrativa a su cargo.

POR TANTO:

Con los antecedentes señalados y de conformidad con los artículos 73 y 77 de la Ley Número 681, “Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema de Control de la Administración Pública y Fiscalización de los Bienes y Recursos del Estado”, 4, 13 y 14 de la Ley Número 438, “Ley de Probidad de los Servidores Públicos”, los suscritos Miembros del Consejo Superior, en uso de las facultades que la Ley es confiere,



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

PRIMERO: Ha lugar a establecer como en efecto se establece, **Responsabilidad Administrativa** a cargo de la Licenciada **ANA MARÍA MARENCO MEMBREÑO**, Contador “A” del Fondo Nacional de Desarrollo Forestal (FONADEFO), por incumplir los artículos, 131 de la Constitución Política sexto párrafo, 12, literal c) de la Ley de Probidad de los Servidores Públicos; 104 numeral 1) de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema de Control de la Administración Pública y Fiscalización de los Bienes y Recursos del Estado y 38 numeral 1) de la Ley del Servicio Civil y la Carrera Administrativa.

SEGUNDO: Por lo que hace a la **Responsabilidad Administrativa** aquí determinada, este Consejo Superior sobre la base de los arts. 78, 79 y 80 de nuestra Ley Orgánica, impone a la Licenciada **ANA MARÍA MARENCO MEMBREÑO** como Sanción Administrativa, **Multa de Un (1) mes de salario**, que deberá ejecutarse y deducirse a favor del Fondo Nacional de Desarrollo Forestal por el titular de dicho ministerio, conforme lo dispuesto en los artículos 83 y 87, numeral 2) de la Ley Orgánica de la Contraloría, según proceda. Del cobro efectivo de las multas se informará a esta Autoridad en el plazo de treinta (30) días, como lo dispone el artículo 79 de la referida Ley Orgánica.

TERCERO: Se le previene a la afectada del derecho que le asiste de recurrir de revisión ante este Consejo Superior en el término de ley, conforme lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley Orgánica de la Contraloría.

Esta Resolución Administrativa está escrita en **cuatro** hojas de papel bond con membrete de la Contraloría General de la República y fue votada y aprobada por unanimidad de votos en **Sesión Número Mil Cinco (1,005)** de las nueve y treinta minutos de la mañana del día **Viernes VEINTIOCHO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS**, por los suscritos Miembros del Consejo Superior de la Contraloría General de la República. Cópiese y Notifíquese.

Lic. Luis Ángel Montenegro E.
Presidente del Consejo Superior

Lic. Marisol Castillo Bellido
Miembro Propietaria del Consejo Superior

Dr. Vicente Chávez Fajardo
Miembro Propietario del Consejo Superior

Lic. Francisco Guerra Cardenal
Miembro Suplente del Consejo Superior

SON/JCSA/LV/LARJ
Consecutivo
Expediente (222)